

La consulta plantea si es necesario obtener el consentimiento previo de los afectados para que la consultante pueda publicar sus datos de carácter personal en la página web de la misma, así como de datos de representantes de personas jurídicas, y para el caso de que se traten con una finalidad diferente de aquella para la que se obtuvieron, en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

I

En primer lugar, es preciso indicar que del tenor de la consulta no se desprende claramente cual es la finalidad concreta para la que se pretende publicar los datos por parte de la consultante siendo la finalidad, clave esencial en la cesión y tratamiento de los datos de carácter personal como señala el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 que establece “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Así mismo, la prohibición de utilizar los datos para una finalidad distinta de aquella para la que fueron recabados, establecida en el número 2 del mismo artículo, constituye un elemento esencial en dicho tratamiento o cesión.

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, contiene en el artículo 8 relativo a la calidad de los datos, una regulación detallada sobre la finalidad como pieza angular para el tratamiento y la cesión de datos.

Por todo ello, al desconocer la finalidad para la que quieren publicarse los datos no podremos sino dar una respuesta de carácter genérico.

II

La publicación de datos de carácter personal en Internet constituye una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 j) de la Ley Orgánica como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.”

La cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal que según dispone el artículo 11.1 de la citada Ley Orgánica, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. El consentimiento deberá ser otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a la que se destinen los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quién se pretende comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

La obligación del consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos enumerados en el artículo 11.2 donde se prevén las excepciones para que la cesión de datos pueda ser efectiva sin recabar dicho consentimiento:

- a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
- b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
- c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
- d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
- e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
- f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos.

En consecuencia sólo será lícita la cesión o publicación en la página web de la consultante sin el consentimiento previo de los afectados, cuando la misma pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 11.2, de lo contrario debería de recabarse el consentimiento del afectado.

Sin embargo, tenemos que poner de manifiesto que el Real Decreto 1720/2007, en el artículo 10. 2. dispone que “No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando:

a) Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes: El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.”

En consecuencia, podemos señalar que si alguna ley o norma de derecho comunitario, prevé que los datos a tratar por la universidad consultante son necesarios para satisfacer algún interés legítimo de la misma, la cesión podría entenderse conforme a la normativa de protección de datos.

III

En cuanto a la posibilidad de publicar en la web documentos que contengan en nombre, apellidos y D.N.I de representantes legales de personas jurídicas en cuanto actúen como tales, es preciso tener en cuenta lo siguiente.

Como cuestión previa, debe recordarse que el documento nacional de identidad ha de ser considerado dato de carácter personal a los efectos previstos en la legislación de protección de datos. Así, recuerda la Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de septiembre de 2008 que “esta Sala ha resuelto en multitud de ocasiones (recurso 22/2006) que debemos partir de una primera consideración jurídica elemental: el número de los documentos de identidad (DNI, pasaporte, etc.) es un dato de carácter personal, y por tanto protegido por la ley”.

Dicho lo anterior, esta Agencia ha tenido la ocasión de poner reiteradamente de manifiesto que el tratamiento del dato referido al documento nacional de identidad junto con los taxativamente enumerados en el artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 implica la inaplicación de la excepción prevista en ese precepto en relación con el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica, sin que ello desvirtúe en modo alguno el espíritu y finalidad de la norma analizada, dado que la misma precisamente enumera de modo taxativo y no meramente ejemplificativo los datos que podrán contenerse en los denominados ficheros de contactos, cuya finalidad no resulta coincidente con la descrita en la consulta. Así, en el informe de 18 de febrero de 2008, seguido de otros muchos, accesibles en el sitio web de esta Agencia, se indicaba lo siguiente:

“En consecuencia, la Agencia ha venido señalando que en los supuestos en que el tratamiento del dato de la persona de contacto es meramente accidental en relación con la finalidad del tratamiento,

referida realmente a las personas jurídicas en las que el sujeto presta sus servicios, no resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, viniendo el Reglamento a plasmar este principio.

No obstante, nuevamente, es necesario que el tratamiento del dato de la persona de contacto sea accesorio en relación con la finalidad perseguida. Ello se materializará mediante el cumplimiento de dos requisitos:

El primero, que aparece expresamente recogido en el Reglamento será el de que los datos tratados se limiten efectivamente a los meramente necesarios para identificar al sujeto en la persona jurídica a la que presta sus servicios. Por este motivo, el Reglamento impone que el tratamiento se limite a los datos de nombre y apellidos, funciones o puestos desempeñados, dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.

De este modo, cualquier tratamiento que contenga datos adicionales a los citados se encontrará plenamente sometido a la Ley Orgánica 15/1999, por exceder de lo meramente imprescindible para identificar al sujeto en cuanto contacto de quien realiza el tratamiento con otra empresa o persona jurídica.

Por ello, no se encontrarían excluidos de la Ley los ficheros en los que, por ejemplo, se incluyera el dato del documento nacional de identidad del sujeto, al no ser el mismo necesario para el mantenimiento del contacto empresarial. Igualmente, y por razones obvias, nunca podrá considerarse que se encuentran excluidos de la Ley Orgánica los ficheros del empresario respecto de su propio personal, en que la finalidad no será el mero contacto, sino el ejercicio de las potestades de organización y dirección que a aquél atribuyen las leyes.

El segundo de los límites se encuentra, como en el supuesto contemplado en el artículo 2.3, en la finalidad que justifica el tratamiento. Como se ha venido indicando reiteradamente, la inclusión de los datos de la persona de contacto debe ser meramente accidental o incidental respecto de la verdadera finalidad perseguida por el tratamiento, que ha de residenciarse no en el sujeto, sino en la entidad en la que el mismo desarrolla su actividad o a la que aquél representa en sus relaciones con quienes tratan los datos.

De este modo, la finalidad del tratamiento debe perseguir una relación directa entre quienes traten el dato y la entidad y no entre aquéllos y quien ostente una determinada posición en la empresa. De este modo, el uso del dato debería dirigirse a la persona jurídica, siendo el dato del sujeto únicamente el medio para lograr esa finalidad.

Así sucedería en caso de que el tratamiento responda a relaciones “business to business”, de modo que las comunicaciones dirigidas a la empresa, simplemente, incorporen el nombre de la persona como medio de representar gráficamente el destinatario de la misma. Por el contrario, sin la relación fuera “business to consumer”, siendo relevante el sujeto cuyo dato ha sido tratado no sólo en cuanto a la posición ocupada sino como destinatario real de la comunicación, el tratamiento se encontraría plenamente sometido a la Ley Orgánica 15/1999, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.2 del Reglamento.”

En consecuencia, si junto con los datos contenidos en el artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica se tratase el referido al número de documento nacional de identidad o equivalente de la persona a la que los datos se refieren, el fichero se encontrará plenamente sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo.